

III. Otras disposiciones

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

10355 ACUERDO de la Junta Electoral Central por el que se hace pública la composición del Comité de Prensa, Radio y Televisión relativo a las elecciones parciales para cubrir un escaño de Senador en representación de la provincia de Barcelona, que se celebrarán el 8 de mayo de 1983.

La Junta Electoral Central, en la sesión celebrada el día de la fecha, ha acordado hacer pública la composición del Comité de Prensa, Radio y Televisión relativo a las elecciones parciales para cubrir un escaño de Senador en representación de la provincia de Barcelona, a que se refiere el artículo 7.º del Real Decreto 489/1983, de 9 de marzo.

La composición del mencionado Comité es la siguiente:

Presidente: Don Ramón López Vilas.

Vocales nombrados por la Administración:

Don Diego Martín Merchán.
Don José Luis Rodríguez Fraguas.
Don Jesús Martín Martínez.
Don Martín Cabañas Núñez.
Don Eladio Gutiérrez Montes.
Don Francisco Virseda Barca.

Vocales designados por la Junta Electoral Central:

Don Luis de Carreras Serra.
Don Carlos Mendo Baos.
Don Jaime Bonéu Farré.
Don José Antonio Gómez-Angulo Rodríguez.
Don José Antonio Escudero López.
Doña Ana María Balletbó y Puig.

Palacio del Congreso, 13 de abril de 1983.—El Presidente, Federico Carlos Sainz de Robles Rodríguez.

10356 ACUERDO de la Junta Electoral Central por el que se hace pública la composición del Comité de Prensa, Radio y Televisión relativo a las elecciones locales y autonómicas de su competencia, que se celebrarán el 8 de mayo de 1983.

La Junta Electoral Central, en la sesión celebrada el día de la fecha, ha acordado hacer pública la composición del Comité de Prensa, Radio y Televisión relativo a las elecciones locales y autonómicas de su competencia, a que se refiere el artículo 2.º del Real Decreto 489/1983, de 9 de marzo.

La composición del mencionado Comité es la siguiente:

Presidente: Don Ramón López Vilas.

Vocales nombrados por la Administración:

Don José Manuel Pérez Castro.
Don Diego Martín Merchán.
Don José Mariano Benítez de Lugo y Guillén.
Don José Luis Rodríguez Fraguas.
Don Jesús Martín Martínez.
Don Martín Cabañas Núñez.
Don Eladio Gutiérrez Montes.
Don Juan Fernández Lozano.
Don Francisco Virseda Barca.
Don Miguel Herrero Lera.

Vocales designados por la Junta Electoral Central:

Don Angel Cruz Bermejo.
Don Jaime Bonéu Farré.
Don Carlos Mendo Baos.
Don José Antonio Gómez-Angulo Rodríguez.
Don Luis Sánchez de Enciso.
Don Antonio Pozuelo Pérez.
Don Bernardo Díaz Nosty.
Don José Miguel Ortega Cano.
Don Luis de Carreras Serra.
Don José Antonio Escudero López.

Palacio del Congreso, 13 de abril de 1983.—El Presidente, Federico Carlos Sainz de Robles Rodríguez.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

10357 REAL DECRETO 775/1983, de 16 de marzo, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a monseñor José Sebastián Laboa Gallego.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en monseñor José Sebastián Laboa Gallego,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.

Dado en Madrid a 16 de marzo de 1983.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores,
FERNANDO MORAN LOPEZ

10358 REAL DECRETO 776/1983, de 16 de marzo, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a monseñor Eduardo Martínez Somalo.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en monseñor Eduardo Martínez Somalo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.

Dado en Madrid a 16 de marzo de 1983.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores,
FERNANDO MORAN LOPEZ

MINISTERIO DE JUSTICIA

10359 ORDEN de 15 de febrero de 1983 por la que se acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Valencia en el recurso número 57º del año 1981, interpuesto por doña María Desamparados Jimeno Barrachina.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo con número 578 de 1981, seguido en única instancia ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Valencia por doña María Desamparados Jimeno Barrachina, contra la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, sobre liquidación de la cuantía de los trienios, efectuada a la interesada por el Habilitado, por no haber sido practicada conforme a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 70/1978, de 29 de diciembre, al no haberle sido aplicada la cuantía que a la proporcionalidad 6 le corresponde como Auxiliar Diplomado de la Administración de Justicia y ante el silencio administrativo aplicado a la reclamación de la referida Auxiliar, se ha dictado sentencia por la mencionada Sala con fecha 9 de diciembre de 1982, cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que estimando, como estimamos, el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña María Desamparados Jimeno Barrachina contra la denegación tácita de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia de su pretensión de que le fueran abonadas las diferencias entre lo realmente percibido, en concepto de trienios, durante el año mil novecientos setenta y nueve y lo debido de percibir con arreglo al índice de proporcionalidad seis, debemos declarar y declaramos, no ajustada a derecho la referida denegación y, consecuentemente, la anulamos; todo ello con condena a la Administración demandada a abonar las diferencias mencionadas y sin hacer especial imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia de la que se llevará certificación a autos, lo pronunciamos, mandamos y firmamos (firmada y rubricada).

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la expresada condena.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I.

Madrid, 15 de febrero de 1983.—P. D., el Subsecretario, Liborio Hierro Sánchez-Pescador.

Ilmo. Sr. Secretario Técnico de Relaciones con la Administración de Justicia.

10360

ORDEN de 15 de febrero de 1983 por la que se acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Valencia en el recurso número 581 del año 1981, interpuesto por doña María Desamparados Pascual Bauzá.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo con número 581 del año 1981, seguido en única instancia ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Valencia por doña María Desamparados Pascual Bauzá, contra la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, sobre liquidación de la cuantía de los trienios efectuada a la interesada por el Habilitado, por no haber sido practicada conforme a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 70/1978, de 29 de diciembre, al no haberle sido aplicada la cuantía que a la proporcionalidad 6 le corresponde como Auxiliar Diplomada de la Administración de Justicia y ante el silencio administrativo aplicado a la reclamación de la referida Auxiliar, se ha dictado sentencia por la mencionada Sala con fecha 7 de diciembre de 1982, cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que estimando, como estimamos, el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña María Desamparados Pascual Bauzá contra la denegación tácita de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia de su pretensión de que le fueran abonadas las diferencias entre lo realmente percibido, en concepto de trienios, durante el año mil novecientos setenta y nueve y lo debido de percibir con arreglo al índice de proporcionalidad seis, debemos declarar y declaramos no ajustada a derecho la referida denegación y, consecuentemente, la anulamos; todo ello con condena a la Administración demandada a abonar las diferencias mencionadas y sin hacer especial imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia de la que se llevará certificación a autos, lo pronunciamos, mandamos y firmamos (firmada y rubricada).»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la expresada condena.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I.

Madrid, 15 de febrero de 1983.—P. D., el Subsecretario, Liborio Hierro Sánchez-Pescador.

Ilmo. Sr. Secretario Técnico de Relaciones con la Administración de Justicia.

10361

ORDEN de 15 de febrero de 1983 por la que se acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Valencia en el recurso número 582 del año 1981, interpuesto por doña Juana Giner Faraig.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo con número 582 del año 1981, seguido en única instancia ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Valencia por doña Juana Giner Faraig, contra la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, sobre liquidación de la cuantía de los trienios efectuada a la interesada por el Habilitado, por no haber sido practicada conforme a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 70/1978, de 29 de diciembre, al no haberle sido aplicada la cuantía que a la proporcionalidad 6 le corresponde como Auxiliar Diplomada de la Administración de Justicia y ante el silencio administrativo aplicado a la reclamación de la referida Auxiliar, se ha dictado sentencia por la mencionada Sala con fecha 9 de diciembre de 1982, cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que estimando, como estimamos, el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Juana Giner Faraig, contra la denegación tácita de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia de su pretensión de que le fueran abonadas las diferencias entre lo realmente percibido, en concepto de trienios, durante el año mil novecientos setenta y nueve y lo debido de percibir con arreglo al índice de proporcionalidad seis, debemos declarar y declaramos no ajustada a derecho la referida denegación y, consecuentemente, la anulamos; todo ello con condena a la Administración demandada a abonar las diferencias mencionadas y sin hacer especial imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia de la que se llevará certificación a autos, lo pronunciamos, mandamos y firmamos (firmada y rubricada).»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la expresada condena.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I.

Madrid, 15 de febrero de 1983.—P. D., el Subsecretario, Liborio Hierro Sánchez-Pescador.

Ilmo. Sr. Secretario Técnico de Relaciones con la Administración de Justicia.

10362

ORDEN de 15 de febrero de 1983 por la que se acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Valencia en el recurso número 583 del año 1981, interpuesto por doña María Teresa Abascal Adrián.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo con número 583 del año 1981, seguido en única instancia ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Valencia por doña María Teresa Abascal Adrián, contra la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, sobre liquidación de la cuantía de los trienios efectuada a la interesada por el Habilitado por no haber sido practicada conforme a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 70/1978, de 29 de diciembre, al no haberle sido aplicada la cuantía que a la proporcionalidad 6 le corresponde como Auxiliar Diplomada de la Administración de Justicia y ante el silencio administrativo aplicado a la reclamación de la referida Auxiliar, se ha dictado sentencia por la mencionada Sala, con fecha 7 de diciembre de 1982, cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que estimando, como estimamos, el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña María Teresa Abascal Adrián, contra la denegación tácita de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia de su pretensión de que le fueran abonadas las diferencias entre lo realmente percibido, en concepto de trienios, durante el año mil novecientos setenta y nueve y lo debido de percibir con arreglo al índice de proporcionalidad seis, debemos declarar y declaramos no ajustada a derecho la referida denegación y, consecuentemente, la anulamos; todo ello con condena a la Administración demandada a abonar las diferencias mencionadas y sin hacer especial imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia de la que se llevará certificación a autos, lo pronunciamos, mandamos y firmamos (firmada y rubricada).»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la expresada condena.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I.

Madrid, 15 de febrero de 1983.—P. D., el Subsecretario, Liborio Hierro Sánchez-Pescador.

Ilmo. Sr. Secretario Técnico de Relaciones con la Administración de Justicia.

10363

RESOLUCION de 3 de marzo de 1983, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Valencia don Joaquín Sapena Tomás, contra la negativa del Registrador Mercantil de la misma localidad, a inscribir dos escrituras de modificación de Estatutos de una Sociedad anónima pendiente de Resolución por este Centro Directivo, en virtud de apelación del Notario recurrente.

En el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Valencia don Joaquín Sapena Tomás, contra la negativa de aquel funcionario a inscribir dos escrituras de modificación de Estatutos de una Sociedad anónima, pendiente de resolución por este Centro Directivo, en virtud de apelación del Notario recurrente;

Resultando que en escritura autorizada por el Notario de Valencia don Joaquín Sapena Tomás, el día 6 de mayo de 1981, don Vicente Pastor Sendra como Director gerente de la Compañía mercantil «Frick & Nilson Española, S. A.», y en ejecución de los acuerdos adoptados por unanimidad por la Junta general de accionistas en sus reuniones de 29 de septiembre de 1979 y 25 de junio de 1980, procedió a la modificación del nombre de la Sociedad, sustituyendo el antiguo por el nuevo de «Frinsa, Sociedad Anónima», así como la reducción del capital social en la cifra de 3.500.000 pesetas disminuyendo el valor nominal de cada acción en 700 pesetas; que en la certificación incorporada a la escritura consta que el saldo adverso de la cuenta de Pérdidas y Ganancias asciende a 3.982.946,06 pesetas y asimismo en su apartado segundo «que de conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la Ley de Sociedades Anónimas, reducir el capital a los únicos fines de restablecer el equilibrio con el patrimonio social en la cantidad de 3.500.000 pesetas, por lo que aquél queda establecido en 1.500.000 pesetas, quedando fijado el valor de la acción en 300 pesetas»; que igualmente se procedió a la modificación de los artículos 1.º, 5.º, 8.º, 13, 16, 17 y 18 de los Estatutos sociales, sustituyendo su redacción por la